



Asamblea General

Distr. general
17 de septiembre de 2019
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 85º período de sesiones, 12 a 16 de agosto de 2019

Opinión núm. 52/2019, relativa a Eun Sil Kang (República Popular Democrática de Corea)*

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 33/30.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 17 de mayo de 2019 al Gobierno de la República Popular Democrática de Corea una comunicación relativa a Eun Sil Kang. El Gobierno respondió a la comunicación el 7 de junio de 2019. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

* De conformidad con el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, Seong-Phil Hong no participó en el examen del caso.



d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Eun Sil Kang, nacida el 20 de junio de 1968, es una ciudadana de la República Popular Democrática de Corea que reside habitualmente en la ciudad de Hyesan, provincia de Ryanggang (República Popular Democrática de Corea).

5. Según se informa, la Sra. Kang era una intermediaria que, durante aproximadamente tres años, transportó divisas (dólares de los Estados Unidos y yuanes chinos) entre desertores de la República Popular Democrática de Corea residentes en China o la República de Corea y personas residentes en la República Popular Democrática de Corea. La fuente señala que, aunque la ley prohibía el comercio de divisas en el mercado privado sin el permiso de las autoridades, estas solían pasar por alto el delito, y a menudo facilitaban ese comercio para su propio beneficio económico.

6. La fuente informa de que, una noche de abril de 2012, varios agentes de la Séptima División del Mando de Seguridad de Defensa irrumpieron repentinamente en la casa de la Sra. Kang y la detuvieron, junto a otros miembros de su familia. Según se informa, en el momento del incidente, los agentes rompieron la puerta, los obligaron a tumbarse en el suelo y los esposaron. No explicaron los motivos de esa actuación. La fuente alega además que los agentes amenazaron a la Sra. Kang y a sus familiares apuntándoles con pistolas en la cabeza.

7. Según la fuente, los agentes cubrieron con telas negras las cabezas de la Sra. Kang y sus familiares y los llevaron esposados ante la Séptima División del Mando de Seguridad de Defensa de la ciudad de Hyesan. En ese momento, la Sra. Kang y sus familiares no sabían a dónde los estaban llevando.

8. La fuente afirma que la Sra. Kang y sus familiares fueron recluidos en régimen de aislamiento en la Séptima División del Mando de Seguridad de Defensa de la ciudad de Hyesan. No les permitieron reunirse dentro de las instalaciones. Aunque algunos miembros de su familia fueron puestos en libertad después de tres meses de investigaciones, la detención de la Sra. Kang duró seis meses. Transcurrido ese período, fue puesta en libertad.

9. La fuente informa de que, en mayo de 2014, la Sra. Kang fue detenida nuevamente por agentes del Departamento de Seguridad del Estado de la provincia de Ryanggang cuando se encontraba en la casa de un familiar en el condado de Unhung, provincia de Ryanggang. Los agentes no informaron a la Sra. Kang ni a sus familiares de los motivos de su detención. Según la fuente, cabe pensar que, desde esa detención, la Sra. Kang se encuentra encarcelada en uno de los campos de reclusión del país.

10. La fuente sostiene que es probable que la Sra. Kang fuese detenida en aplicación de uno o más de los siguientes artículos del Código Penal: artículo 63 (espionaje), artículo 106 (comercio ilícito de equipo y suministros en divisas), artículo 111 (actividad comercial ilícita de un particular) y artículo 234 (prestación de ayuda para el cruce ilegal de la frontera).

11. La fuente alega que, una vez que comienza el período de reclusión, los familiares no pueden solicitar de las autoridades información oficial sobre las personas detenidas. Además, si una persona es enviada a un campo de reclusión, su dirección cambia automáticamente a la del campo y su oficio también pasa a ser el de trabajador afiliado a la Oficina núm. 7 del Organismo Nacional de Seguridad, la Oficina de Instrucción Agrícola. Por lo tanto, es difícil determinar a qué centro penitenciario se ha remitido a una persona.

12. Además, la fuente afirma que en la República Popular Democrática de Corea no existen procedimientos jurídicos para la presentación de recursos y que, a pesar de que hay abogados en el país, su existencia es puramente formal. Según la fuente, si una persona es enviada a un campo de reclusión, las autoridades suelen encarcelarla sin la celebración de juicio. Por lo tanto, no existen condiciones de reclusión ni posibilidades de apelación. Los ciudadanos no tienen conocimiento de que exista un sistema de apelación en la República Popular Democrática de Corea.

13. La fuente declara que no se han interpuesto recursos en nombre de la Sra. Kang en la jurisdicción interna, ya que la presentación de denuncias o la adopción de medidas para impugnar una detención llevada a cabo por las autoridades se considera una actividad en contra del Gobierno y, por lo tanto, punible.

Respuesta del Gobierno

14. El 17 de mayo de 2019, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno en el marco de su procedimiento ordinario de comunicaciones. Asimismo, le pidió que presentara, a más tardar el 16 de julio de 2019, información detallada sobre la situación actual de la Sra. Kang y que aclarara las disposiciones legales que justificaban que siguiese detenida, así como la compatibilidad de esas disposiciones con las obligaciones contraídas por la República Popular Democrática de Corea en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, de los tratados ratificados por el Estado. Asimismo, el Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno a que velara por la integridad física y mental de la Sra. Kang.

15. El 7 de junio de 2019, el Gobierno presentó su respuesta, que se remitió en esa misma fecha a la fuente para que formulara nuevas observaciones.

16. En su respuesta, el Gobierno declaró que, tras examinar la comunicación relativa a la Sra. Kang, había determinado que el caso no era pertinente para la República Popular Democrática de Corea. El Gobierno argumentaba que, como en casos anteriores, esas comunicaciones formaban parte de un complot político estereotipado contra la República Popular Democrática de Corea por parte de fuerzas hostiles, que recurrían a la retórica de los “derechos humanos” para actuar contra el país. Por lo tanto, el Gobierno rechazaba categóricamente una vez más el presente caso por enmarcarse en una conspiración contra el país iniciada con fines políticos con el pretexto de defender los derechos humanos. El Gobierno recomendó al Grupo de Trabajo que tratase de vislumbrar el motivo oculto tras esas comunicaciones y que adoptase una actitud justa y crítica hacia los intentos malintencionados de las fuerzas hostiles de relacionar de manera imprudente a la República Popular Democrática de Corea con cualquier cuestión basándose en información falsa y conjeturas.

Deliberaciones

17. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y al Gobierno la información recibida, y celebra la cooperación y la participación de ambas partes en el presente caso, por breve que haya sido.

18. El Grupo de Trabajo lamenta la reiterada negativa del Gobierno de la República Popular Democrática de Corea a colaborar de manera constructiva con él para abordar las alegaciones planteadas¹. El Grupo de Trabajo insiste en que siempre procura que los gobiernos participen de manera constructiva en su procedimiento ordinario de comunicaciones. No obstante, en los casos en que los gobiernos optan por no colaborar con el Grupo de Trabajo o por limitar esa colaboración a la desestimación sumaria de las alegaciones planteadas, el Grupo de Trabajo no tiene más opción que examinar las denuncias teniendo en cuenta toda la información de la que dispone, incluida la información de otros órganos de las Naciones Unidas, en particular otros procedimientos especiales y órganos creados en virtud de tratados, así como de las organizaciones regionales pertinentes.

¹ Véanse las opiniones núms. 54/2018 y 54/2017.

19. En el presente caso, el Grupo de Trabajo toma nota de los informes presentados en 2018 y 2019 por el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea (véanse A/73/386 y A/HRC/40/66). En su informe más reciente, el Relator Especial señalaba que, aunque la información sobre la situación actual y reciente del sistema de campamentos de presos políticos era muy limitada, seguía recibiendo informes sobre personas que habían sido acusadas de cometer delitos contra el Estado y que eran enviadas a esos campamentos, sin ninguna garantía jurídica o procesal, de un modo que equivalía a una desaparición forzada, sin que sus familias conociesen su paradero y con escasas o nulas posibilidades de reintegrarse a la sociedad (A/HRC/40/66, párr. 26).

20. Esto parece reflejar las alegaciones que el Grupo de Trabajo ha recibido en relación con la situación de la Sra. Kang. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo acepta esas denuncias como creíbles, especialmente teniendo en cuenta que el Gobierno ha optado por no abordarlas.

21. El Grupo de Trabajo recuerda que considera que la privación de libertad es arbitraria y se inscribe en la categoría I si carece de fundamento jurídico. A ese respecto, tal y como ha establecido el Grupo de Trabajo con anterioridad, para que la privación de libertad tenga fundamento jurídico, no basta con que exista una ley que autorice la detención de una persona. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y aplicarlo a las circunstancias del caso mediante una orden de detención².

22. En el presente caso, la Sra. Kang fue detenida en dos ocasiones, en abril de 2012 y mayo de 2014. En ambos casos, no se presentó ninguna orden de detención ni se informó a la interesada de los motivos de esas detenciones. Ello implica que las autoridades de la República Popular Democrática de Corea no invocaron debidamente el fundamento jurídico para la detención de la Sra. Kang en ninguna de esas dos ocasiones, lo que vulnera el artículo 9, párrafo 1, del Pacto. Además, como se establece en el artículo 9, párrafo 2, del Pacto, la Sra. Kang tenía derecho a que se le explicaran las razones de su detención. El Grupo de Trabajo observa que, en ambas ocasiones, las autoridades violaron esa disposición.

23. Asimismo, el Grupo de Trabajo ha sostenido sistemáticamente que la reclusión de personas en régimen de incomunicación vulnera su derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal según lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 4, del Pacto³. El Grupo de Trabajo considera que el examen judicial de la detención es una salvaguarda fundamental de la libertad personal⁴ y un elemento esencial para asegurar que la detención tiene un fundamento jurídico. El Grupo de Trabajo considera que la reclusión de la Sra. Kang durante seis meses tras su detención en abril de 2012 equivalió a una reclusión en régimen de aislamiento, ya que se le negó todo contacto con el mundo exterior. Esto supuso una violación de su derecho a un recurso efectivo en virtud del artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 2, párrafo 3, del Pacto.

24. Posteriormente, tras su detención en abril de 2014, la Sra. Kang fue presuntamente enviada a un campo de reclusión, pese a que no se habían presentado cargos contra ella, no había sido inculpada y no se había celebrado ningún juicio ni pronunciado ninguna sentencia que legitimase su privación de libertad durante más de cinco años. Esto constituye una denegación flagrante y absoluta de los derechos que la asisten en virtud de los artículos 9, 14 y 16 del Pacto.

25. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo concluye que la detención y reclusión de la Sra. Kang en abril de 2012, así como su detención y reclusión desde mayo de 2014, son arbitrarias y carecen de fundamento jurídico, por lo que se inscriben en la categoría I.

26. El Grupo de Trabajo está sumamente preocupado por el hecho de que no se haya aportado información sobre el lugar en el que permanece detenida la Sra. Kang o al menos

² Véanse las opiniones núms. 35/2018, 75/2017, 66/2017 y 46/2017.

³ Véanse las opiniones núms. 79/2017 y 28/2016.

⁴ Véanse los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal.

sobre su bienestar. En vista de ello, y de conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea para que tomen las medidas correspondientes.

Decisión

27. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La privación de libertad de Eun Sil Kang es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 6, 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafo 3, 9, 14 y 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en la categoría I.

28. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de la República Popular Democrática de Corea que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de la Sra. Kang sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

29. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a la Sra. Kang inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

30. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de la Sra. Kang y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

31. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea para que tomen las medidas correspondientes.

32. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

33. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad a la Sra. Kang y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones a la Sra. Kang;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos de la Sra. Kang y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de la República Popular Democrática de Corea con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

34. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

35. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su

propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

36. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado⁵.

[Aprobada el 16 de agosto de 2019]

⁵ Véase la resolución 33/30 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.